

ACUERDO N° 0143/2017
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

VISTOS: La facultad de designación y cesación de servidores jurisdiccionales como administrativos del Órgano Judicial, establecida en la Ley No. 025 del Órgano Judicial, lo dispuesto en la Constitución Política del Estado; sus antecedentes y,

CONSIDERANDO: Que, el Art. 193 Par. I de la Constitución Política del Estado señala que el Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión; empero además con facultades en materia de recursos humanos conforme establece el Art. 182 Núm. 1 de la Ley No. 025.

Que, la designación de los Encargados Distritales y Directores Nacionales del Consejo de la Magistratura, es atribución exclusiva y privativa de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, al ser personal considerado de libre nombramiento y designación, conforme establece el Art. 5 Inc. b) de la Ley No. 2027 y pertenecen al ámbito de los funcionarios provisorios, por cuanto su ingreso y remoción de la entidad no son resultado de aquellos procesos de reclutamiento y selección de personal, sino que obedecen a una invitación para ocupar determinadas funciones de confianza o asesoramiento en la institución; infiriéndose de ello que estas funciones son temporales o provisionales, es decir, mientras dure la gestión del funcionario designado, y que por tanto son también de libre remoción.

Que, por disposición de la Leyes Transitorias 03, 040 y 212 como la Ley 025 del Órgano Judicial, se ha establecido que los servidores judiciales designados a partir del 2 de enero de 2012 por el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, son personal PROVISORIO al no estar sujetos a ningún reglamento de la carrera judicial o administrativa, como establece el art. 71 de la Ley 2027, que preceptúa "Los servidores públicos que actualmente desempeñan sus funciones o cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que **no gozaran de los derechos a los que hace referencia el numeral II del Art. 7 de la presente Ley**, vale decir no tiene derecho, a la carrera administrativa y su estabilidad inspirada en el reconocimiento de méritos, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad. A la capacitación y su perfeccionamiento a impugnar las decisiones administrativas sea mediante la Ley 2027 o reglamentos, relativo a su ingreso, promoción o **retiro** o aquellos que deriven de procesos disciplinarios y los otros derechos establecidos en el art. 7 de la Ley 2027.

La Sentencia Constitucional Plurinacional No 61/2014 S3 de 20 de octubre, ha desarrollado la jurisprudencia sobre el derecho de los funcionarios públicos provisorios y los de carrera administrativa, en los siguientes términos:

En sus Fundamentos Jurídicos II.1. Desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la estabilidad laboral de las servidoras y servidores públicos de carrera y provisorios La SC 0257/2011-R de 16 de marzo al analizar la problemática manifestó lo siguiente: "En virtud al art. 71 del EFP y a lo previsto en el art. 36 del DS 25749, Reglamentario del Estatuto del Funcionario Público, por el cual se señaló que 'Los funcionarios incorporados a las entidades públicas hasta la vigencia de la Ley N° 2027 sin proceso de convocatorias públicas competitivas y valuación de méritos, tendrán el carácter de funcionarios públicos provisorios. Por consiguiente, dichos funcionarios no serán acreedores a los derechos contenidos en el numeral II del art. 7 de a mencionada Ley...'; la jurisprudencia constitucional, a partir de la SC 0051/2002-R de 18 de enero de 2002,

sostuvo que los funcionarios provisorios no gozaban del derecho a la estabilidad laboral, que estaba previsto únicamente para los funcionarios de carrera, y que tampoco debían ser sometidos a previo proceso disciplinario para su destitución, conforme al siguiente razonamiento:

'Que, en su condición de funcionario público provisorio, el recurrente no goza del derecho a la estabilidad laboral, prevista sólo para los funcionarios de carrera, de acuerdo al art. 7.II, inc. a) del Estatuto del Funcionario Público, y tampoco es aplicable el caso de retiro por la vía de la destitución, previo proceso disciplinario, pues éste también es un derecho exclusivo de aquellos funcionarios incorporados a la carrera administrativa, según determina el art. 41 de dicho Estatuto. Que, en consecuencia, la destitución del recurrente no constituye un acto ilegal ni una omisión indebida, pues está enmarcada a derecho'. En el mismo sentido se han pronunciado las SSCC 420/2002-R, 1013/2002-R, 1229/2002-R, 281/2003-R, 1516/2003-R, 1692/2003-R, 371/2004-R, 463/2004-R, 694/2004-R, entre otras.

Que, el Director Nacional de Derechos Reales, Dr. Jorge Bohórquez Torrez, ha sido detenido preventivamente en la Cárcel de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, por una investigación penal por supuestos actos de corrupción en el ejercicio de la función pública, e imputado penalmente por el delito de concusión y otros previstos en el Código Penal Boliviano, a denuncia del Ministerio de Justicia.

Que, en sesión de fecha 03 de agosto de 2017, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, procedió a cesar en sus funciones al Director Nacional de Derechos Reales, Dra. Jorge Bohórquez Torrez, por razones de interés institucional al haber dañado la imagen del Consejo de la Magistratura y del Órgano Judicial, por lo que conforme las disposiciones señaladas anteriormente, corresponde que el Pleno del Consejo de la Magistratura emita el correspondiente Acuerdo.

POR TANTO: El Pleno del Consejo de la Magistratura en uso de sus atribuciones, contenidas en el Art. 182 Numerales 1 y 3 de la Ley No. 025 del Órgano Judicial.

ACUERDA:

Primero.- Cesar en el cargo de **DIRECTOR NACIONAL DE DERECHOS REALES** al ciudadano **Jorge Bohórquez Torrez**.

Segundo.- Encomendar el cumplimiento del presente Acuerdo al Presidente del Consejo de la Magistratura, conforme el Art. 180 Núm. 4 de la Ley 025 del Órgano Judicial, y la Dirección Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, debiendo emitir el correspondiente memorándum de cesación de funciones del referido servidor administrativo

Es acordado en la ciudad de Sucre, en la Sala de Reuniones del Consejo de la Magistratura, a los tres días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

Regístrese y comuníquese:


Abog. Roxana Orellana Mercado
CONSEJERA DE LA MAGISTRATURA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

UNAJ/CM


Juan Orlando Rios Luna
DECANO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

ACUERDO No. 0143/2017


Dr. Emilio Cepalillo Porfirio Berdeja
CONSEJERO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Página | 2 de 2